



El imperio contraataca

La semana pasada, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló en contra del nombramiento de David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y de Francisco Salinas como Director de la PNC.



Un poquito de historia

A finales de 2011, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, le pidió a la Embajada de Estados Unidos la lista de traficantes de drogas, registro que la Embajada tenía en su poder. La Embajada se molestó y presionó al Presidente Mauricio Funes para que destituyera a Melgar y a otros miembros del FMLN o personas cercanas, que dirigían instituciones del sistema de seguridad pública.

Rodaron seis cabezas: Melgar fue sustituido por Munguía Payés; Carlos Ascencio fue cambiado por Francisco Salinas; Eduardo Linares fue relevado por Ricardo Perdomo, en la jefatura del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). También fue despedido el Director de Migración y Extranjería, Rubén Alvarado; y renunciaron a sus puestos, la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas, y el Viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.

A cambio de esos relevos, el gobierno estadounidense incidió para frenar el crimen organizado, al que

protege y le vende armas, y bajó el número de homicidios. Para enmascarar esa movida, nació un "pacto" entre pandillas. Entonces, los crímenes disminuyeron pero no por la tal "tregua", sino por la decisión de Estados Unidos.



Tras el nombramiento de Munguía Payés y Salinas, instituciones de derechos humanos pusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la CSJ, razonando que la ley prohíbe a militares ocupar esos cargos. Pero como la Embajada apoyaba las designaciones, la Sala de lo Constitucional no actuó durante año y medio.

¿Y qué pasó ahora?



El gobierno norteamericano está molesto con Funes porque éste no decide aliarse con Antonio Saca, que es una apuesta electoral de la estrategia de Estados Unidos. Tampoco le ha parecido que Funes aceptara cambios del FMLN a la Ley de Asociados Públicos Privados, cuya propuesta original, que contemplaba la privatización de muchos servicios públicos, fue elaborada por técnicos de ese país.

El gobierno norteamericano está molesto con Funes porque éste no decide aliarse con Antonio Saca, que es una apuesta electoral de la estrategia de Estados Unidos. Tampoco le ha parecido que Funes aceptara cambios del FMLN a la Ley de Asociados Públicos Privados, cuya propuesta original, que contemplaba la privatización de muchos servicios públicos, fue elaborada por técnicos de ese país.

La presión sobre Funes vino por el lado de la "tregua". El primer ataque fue el 9 de mayo por el Fiscal General; luego el 12 de mayo fue la alta jerarquía católica; y por fin, el 17 de mayo la Embajada le ordenó a la Sala de lo Constitucional dejar caer el hacha sobre las cabezas de quienes antes ellos mismos habían apoyado.

Ahora el país está expuesto al aumento del accionar del crimen organizado y que haya más homicidios en la medida que se acerquen las elecciones.

También se encendería la artillería mediática para disparar mensajes sobre el "fracaso de la tregua" y la "incapacidad del gobierno del FMLN" de combatir la delincuencia.

La Embajada y la derecha salvadoreña quitan, ponen y mueven piezas en la cancha de la disputa política. Pero el pueblo ya sabe como vienen sus movidas y por donde meterles gol.